LAS PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL BRASILEÑO: breve estudio

Por Greicy Maura Henrich

Maestranda en Ciencias Criminológico Forenses
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

Jorge Augusto de Medeiros PINHEIRO

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)

Resumen

Este artículo examina el papel de la prueba en el proceso penal brasileño, destacando su importancia en la búsqueda de la verdad real y en la garantía de decisiones judiciales justas. Se abordan las principales clasificaciones de la prueba, diferenciando entre prueba directa e indirecta, personal y real, además de su obtención y valorización dentro del marco legal. También se analiza el principio de libertad del juez y su impacto en la construcción de la pena. A lo largo del estudio, se destaca la necesidad de un proceso probatorio sólido y acorde con los principios constitucionales, con el objetivo de garantizar la imparcialidad y seguridad jurídica en el sistema penal brasileño.

Palabras clave: Pruebas. Procedimiento penal brasileño.

I. INTRODUCCIÓN

El proceso penal brasileño basado en la búsqueda de la verdad real y la implementación de la justicia, depende en gran medida de la recopilación, análisis y evaluación de pruebas para garantizar un juicio justo. En este contexto, la prueba asume un papel central, funcionando como vínculo entre los hechos alegados y su veracidad, siendo esencial para la construcción de un proceso que garantice los derechos del imputado, del Ministerio Público y de la sociedad en su conjunto.

El artículo 5, inciso LV, de la Constitución Federal de 1988 garantiza el derecho pleno a la defensa, el contradictorio y la prueba, en este escenario, es el principal instrumento para la materialización de estos derechos, ya que permite a las partes presentar y refutar los elementos fácticos que sustentan sus alegaciones.

En derecho penal las pruebas deben recolectarse dentro de estrictos límites legales para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera legal y justa y, por lo tanto, que el acusado no sea condenado sin la debida prueba de su culpabilidad.

El principio de presunción de inocencia, que rige el sistema jurídico brasileño, hace que el uso apropiado y ético de la evidencia sea aún más crucial, ya que la carga de la prueba recae en la acusación. Partiendo de esta premisa, cualquier error o violación en el proceso de obtención y análisis de pruebas puede resultar en graves daños a los derechos del imputado, comprometiendo la integridad del sistema judicial.

En este artículo se abordarán temas fundamentales del derecho procesal penal brasileño relacionados con la prueba, con especial énfasis en diferenciar entre tipos de prueba y las formas en que se obtiene y utiliza durante el proceso.

En primer lugar, se discutirá la distinción entre prueba material y personal, abordando sus características y la relevancia de cada una en el conjunto probatorio. A continuación se analizarán las formas de prueba previstas en el Código Procesal Penal, con especial atención a las innovaciones aportadas por la jurisprudencia y la doctrina contemporánea.

El artículo también buscará reflexionar sobre la importancia de evaluar la prueba, considerando los principios constitucionales que guían el proceso penal, como la convicción del juez y la necesidad de equilibrio entre el poder estatal y los derechos individuales del imputado.

Al final, pretendemos presentar una visión crítica de los desafíos y lagunas que aún existen en el tratamiento de la prueba en los procesos penales, proponiendo posibles soluciones para mejorar el sistema judicial brasileño.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA TEORÍA DE LA PRUEBA

Este artículo se inicia con la ilustre y atemporal cita de Voltaire: “Es mejor correr el riesgo de salvar a un culpable que condenar a un inocente” (Voltaire, 2017, p.37).

Preliminarmente, para una mejor comprensión es fundamental comprender la etimología de la palabra prueba. Parafraseando a Paulo Rangel, el concepto de prueba es amplio, pues existen diferentes significados de la palabra en el proceso. El autor, haciendo referencia al Diccionario Aurélio, traduce la palabra como algo que da fe de la veracidad o autenticidad de algo. La investigación también complementa el entendimiento explorando la definición de prueba en el ámbito del derecho, explicando que, en este campo, la prueba es el instrumento utilizado por las partes en controversia para probar los hechos, los cuales constituyen la base del derecho a preguntar y defenderse (Rangel, 2017).

El término prueba tiene tres significados: El acto de probar, es decir, verificar la verosimilitud de lo que se alega; Medios, o sea, los instrumentos utilizados para demostrar la verdad; Resultado de la acción de probar, producto extraído de la evidencia -verdad- (Nucci, 2025).

Lato sensu, Távora y Alencar (2017, p. 608) resumen que “prueba es todo aquello que contribuyó a la formación de la convicción del juez, demostrando los hechos, actos o incluso el propio derecho discutido en el litigio”.

En otras palabras, la prueba son todos los resultados que surgen de los instrumentos utilizados para corroborar la veracidad de las alegaciones contenidas en el proceso. Así, se dice que una prueba pasa por las tres líneas de cognición mencionadas anteriormente.

En primer lugar, es necesario el acto de probar algo, que se busca a través de los medios disponibles para hacerlo, permitidos y no defendidos por la normativa brasileña, y, todo ello, con el fin de lograr el resultado - la verdad - extraída directamente del material, es el objetivo del proceso penal.

Se entiende, por tanto, que la prueba, en sentido connotativo, son los pilares de la acción penal. Según Fernando Capez, la evidencia constituye el fundamento sobre el que se estructura la dialéctica procedimental, constituyendo así el tema más fundamental de la ciencia procesal. Es decir, confirma que sin pruebas el proceso tiene poco objeto (Capez, 2017).

Como fundamento de la acción penal, el objetivo de la prueba es reconstruir la verdad. A través de la vía probatoria se busca una mayor paridad con la realidad de los hechos, ocurridos efectivamente en el tiempo y el espacio. La búsqueda de la reconstrucción de la verdad es fundamental, porque, como enseña Aury Lopes Júnior, el juez no conoce el hecho (es, y debe ser, ignorante al respecto), y lo hará a través de las pruebas recabadas en el transcurso del proceso. Es decir, el juez sólo tendrá conocimiento de toda la trama, a partir de información efectivamente confirmada con pruebas aportadas por un proceso justo (Pacelli, 2013).

En este paso es imprescindible citar a Jacinto Coutinho, quien dice que “el medio para hacer que la verdad contribuya al proceso es la prueba, y forma el conjunto de elementos a través de los cuales se constituye la convicción del juez en el caso concreto, aunque todos sepan que no es la única verdad que forma la sentencia” (Coutinho, 2002, p. 177).

La falta de conocimiento del juez sobre los hechos, es decir, su ignorancia sobre el caso, así como su independencia, es esencial para un juicio imparcial, para un proceso justo. Cualquier otro medio de conocimiento y convicción de versiones que no provengan del proceso, respetando todas sus reglas, no es legítimo y puede menoscabar la neutralidad del juez, causando un daño irreparable a una de las partes, siendo ésta normalmente el imputado. Es necesario que el proceso respete principios materiales de civilidad jurídica, hasta la sustanciación de la sentencia, y las garantías formales previstas en el procedimiento por sí solas no son suficientes (Nicollit, 2011).

Gustavo Badaró afirma, respecto a la búsqueda de la verdad, que ésta legitima las decisiones, mientras que sólo a través de un proceso que la busca es posible considerar una decisión como justa. Agrega que “Justicia y verdad son, por tanto, nociones complementarias al ejercicio del poder. Si no fuera así, sería mejor que el proceso decidido por la suerte, tirar los dados” (Badaró, 2016, p. 382).

Por ello, es posible entender que las decisiones justas son aquellas basadas en las pruebas recabadas en el caso, es decir, basadas en los elementos probatorios que acercan los hechos a la verdad. Las sentencias dictadas con base en elementos distintos de las pruebas aportadas durante el proceso, o basadas exclusivamente en pruebas recabadas durante la fase inquisitiva, en la comisaría, y no repetidas en el tribunal, si es posible (como se explica con mayor profundidad más adelante), no se

traducen en una condena racional, transformando el proceso penal en un juego de suerte (Barros, 2002).

Esto se debe a que el juez sólo puede tener certeza de un hecho, para dictar sentencia condenatoria, considerando las pruebas aportadas hasta el momento. A través de los elementos probatorios, es posible que el juez considere las hipótesis deducidas de ambas partes, convenciéndose de una entre las posibles, sirviendo la prueba como certificado de la veracidad de su conocimiento (Badaró, 2016).

Sumamos las palabras de Aury Lopes Junior, quien también entiende que la prueba, además de la función de inducir el juicio, de persuadir al juez, hace creer a los ciudadanos que el proceso penal refleja la verdad real, aunque en realidad no sea así, porque ese concepto no puede obtenerse. Cabe señalar que es importante que los ciudadanos creen que el proceso penal refleja la verdad, ya que esto transmite el sentimiento de seguridad jurídica, certeza subjetiva de la justicia, que debe basarse en pruebas, con la abstención de la influencia mediática, que repetidamente contribuye negativamente al juicio mental, sin el cual se vuelve imposible llegar a un resultado de veracidad procesal, sin influencia sentimental de ninguna parte sobre personas que no conocen la ley. Los medios de comunicación tienen el poder de preestablecer juicios y prejuicios hacia las personas involucradas en procesos y casos, dificultando la pericia del proceso, que debe ser analizado sin sentimientos respecto del hecho ni de los involucrados (Lopes, 2020).

Está claro que a través del proceso no se puede alcanzar la verdad absoluta, sin embargo, una certeza relativa ya se considera suficiente para la condena del juez. De hecho, Eugênio Pacelli advierte sobre la imposibilidad de renunciar a la reconstrucción de la verdad, buscando una mayor paridad con la realidad, por difícil que parezca.

En este sentido, es claro que el proceso penal es el único instrumento estatal capaz de resolver conflictos de materia penal y, por tanto, respetando el procedimiento y las reglas procesales determinadas, es imposible que el caso no esté sustentado en pruebas. La reconstrucción aproximada de la verdad es el elemento que sustenta cualquier decisión en el proceso procesal, ya que existe un vínculo umbilical entre la reconstrucción histórica de los hechos y la responsabilidad del Estado por una provisión judicial justa y adecuada (Barros, 2002).

Por lo tanto, es claro que el destinatario de la prueba producida en el caso, directa e inmediatamente, es el magistrado, éste es la autoridad judicial encargada, en primera instancia, de juzgar el caso, y debe ser convencida a través del material probatorio aportado al caso. Por otro lado, las partes también son destinatarias de la prueba, indirecta y mediatamente, pues persuadidas por lo demostrado aceptarán más fácilmente la decisión, incluso si existe insatisfacción con el contenido (Távora & Alencar, 2017).

En definitiva, la prueba en el proceso penal juega un papel fundamental en la búsqueda de la verdad y en la toma de decisiones justas e imparciales. No sólo son la base sobre la cual el juez debe fundamentar su condena, sino que también aseguran que el proceso se lleve a cabo conforme a los principios legales y la búsqueda de la equidad. Aun reconociendo las limitaciones para alcanzar una verdad absoluta, el uso adecuado de la evidencia permite una reconstrucción plausible de los hechos, esencial para la implementación de la justicia y para la confianza de la sociedad en el sistema jurídico.

III. LAS PRUEBAS Y SUS CLASIFICACIONES

En cuanto al objeto de la prueba penal, tiene por objeto tratar toda circunstancia, hecho, cosa, suceso o alegación que deba ser conocido y demostrado al juez para resolver el conflicto. Las cuestiones respecto de las cuales existe incertidumbre, y cuyo conocimiento tiene el poder de influir en la decisión del juez, son, por tanto, imprescindibles para ser probadas para permitir un juicio de valor. Es el tema *propandum* utilizado para justificar la imputación realizada por el órgano ministerial, según la doctrina de Rangel (2017).

Sin embargo, el objeto de la prueba se distingue del objeto de la prueba, que a su vez concierne únicamente a la cuestión pertinente a probar. Según Badaró (2016), los hechos impertinentes, irrelevantes y notorios no requieren prueba, por ser de dominio público o cuya ciencia de ninguna manera influiría, ni contribuiría de ninguna manera a la solución final. En cuanto al derecho alegado, por regla general no es objeto de prueba, sin embargo, puede ser necesario demostrar el contenido y vigencia del derecho municipal, estatal, extranjero y consuetudinario.

La prueba tiene varias clasificaciones, a saber: respecto al objeto, al sujeto, al valor, a la forma, al efecto, a la posibilidad de renovación judicial, al momento procesal, a la disposición legal, a la finalidad de la prueba y a la imposición legal de la forma de la prueba. Las tres primeras son las clasificaciones principales y son comúnmente mencionadas por los estudiosos, diferenciándose el resto según el trabajo (Avena, 2018).

Teniendo en cuenta el objeto, la prueba puede ser directa o indirecta. Según Rangel (2017), directa es la prueba que se refiere al hecho mismo, demostrando la existencia o no de los hechos narrados en la denuncia. A modo de ejemplo se citan el testimonio de un testigo que presenció el hecho, el informe del examen del corpus delicti y la confesión del acusado. En otras palabras, Lima plantea que la prueba directa es aquella que permite conocer el hecho mediante una única operación inferencial (Lima, 2019).

Indirectas, a su vez, son las evidencias que requieren de una construcción lógica para llegar a ella, no refiriéndose al hecho de manera inmediata, sino llegando a él mediante un razonamiento lógico, un proceso mental de conectar la evidencia con otra información de conocimiento común, o también demostrada en los registros. Távora y Alencar (2017) lo describen como:

Indirecto, negativo o contrario: se refiere a otro acontecimiento que, por implicación, nos lleva al hecho principal. Su finalidad es negar que el hecho haya ocurrido, basándose en otro hecho lógicamente incompatible con el que le corresponde probar a la Fiscalía. Se trata de prueba contraria o prueba con signo negativo, por oponerse a la afirmación que es objeto de prueba. No debe confundirse con la contraprueba, que tiene un espectro menor que el de la prueba contraria, ya que la primera es resultado de la contradicción y tiende a brindar oportunidades para que la parte contraria cuestione las pruebas producidas por la otra. La contraprueba tiene la particularidad de atenuar la credibilidad de la prueba inicialmente aportada por la parte contraria, como ocurre con la respuesta preliminar a la acusación prevista en el artículo 396 –A, CPP, en el momento en que el imputado puede “ofrecer documentos”. (p. 622)

Sin embargo, existe una clara crítica a la clasificación de las pruebas directas e indirectas. Lopes (2020, p. 384) explica que esa clasificación es un error, mientras que toda evidencia es, en realidad, indirecta. Esto se debe a que son sólo signos de los supuestos datos. El autor establece que “las pruebas son signos del hecho que queremos saber, es decir, una relación semiótica configurable de diferentes maneras, en la que del análisis correspondiente surge la más útil de las posibles”.

Las pruebas se clasifican en personales y reales. Según Malatesta (2013), el hecho puede dejar dos tipos de huellas, las reales y las morales. Las huellas reales conciernen a modalidades concretas, a modalidades inconscientes y a la cosa misma. La moral, a su vez, son impresiones que surgen de la memoria, es decir, la revelación consciente de impresiones mnemotécnicas. El sujeto de esta última especie es el ser humano que conserva las impresiones y las revela, caracterizando la prueba personal.

Según la forma (apariciencia), la prueba se divide en testimonial, documental y material, según la forma en que se revela en el proceso.

Silva y Silva (2013) aclaran que la testimonial es prueba que resulta del testimonio de un sujeto que tiene conocimientos relevantes para el caso (destacando que la prueba producida en la fase policial debe ser repetida en el tribunal para que pueda servir para sustentar un decreto condenatorio); documental, el producido a través de la documentación, es decir, que se manifiesta gráficamente; y material, evidencia recolectada por medios químicos, físicos o biológicos, capaces de demostrar peculiaridades del hecho.

En cuanto al efecto, o valor, la prueba puede ser plena o semicompleta (también conocida como probatoria). La primera, plena, se refiere a la prueba precisa para formar un juicio de certeza, imprescindible para una condena. Como ejemplo se menciona el informe de cuerpo del delito, necesario para acreditar, entre otros hechos, la ocurrencia de una lesión corporal. Semiplenas, o indicativas, sin embargo, son las pruebas para las que sólo es necesario un juicio de mera reprochabilidad, pruebas vehementes, se confunden con pruebas y presunciones, al no producir certeza, utilizándose en fases del proceso en las que no es imprescindible un juicio de certeza, como una sentencia de pronunciamiento, por ejemplo, para la que es necesaria certeza de materialidad, pero sólo prueba de autoría (Silva y Silva, 2013).

En cuanto a la posibilidad de renovación en vía judicial, existen dos clasificaciones, siendo la prueba repetible (también conocida como renovable) o irrepetible (no repetible o no renovable). El segundo son las pruebas de origen percedero, que no son aptas para su reproducción judicial después de un determinado período de tiempo o que presentan un riesgo de pérdida si no se recogen en ese momento, como, por ejemplo, el examen del cuerpo del delito en busca de lesiones corporales. Se sabe que las lesiones leves pueden desaparecer en un corto espacio de tiempo, haciendo inviable un examen más detallado. Es de destacar que las pruebas no renovables pueden servir de base para la decisión de sentencia, aunque se recojan sólo durante la fase policial, por su naturaleza se diferencian de las pruebas renovables recogidas en la misma oportunidad, que sólo pueden utilizarse para la absolución, si no se renuevan en el tribunal. Repetibles, a su vez, son pruebas que pueden ser rehechas en presencia del juez y de las partes, sin posibilidad de perder valor, como la declaración testimonial, el reconocimiento de personas, de cosas, de voz y de cobro, por ejemplo (Lopes, 2003).

Se dividen en nombradas, que pueden ser típicas o atípicas, y no nombradas, las pruebas relativas a la determinación jurídica. Se determina que se nombra la prueba prevista por la legislación. Se considera típica cuando su forma está determinada por la ley, como prueba testimonial, que tiene instrucciones para formular preguntas en un mismo diploma, por ejemplo. Son atípicas las pruebas para las cuales la legislación no establece el procedimiento. El anonimato, sin embargo, se asocia a la libertad probatoria, no prevista explícitamente, pero tampoco a la defensa por parte del sistema jurídico (Távora & Alencar, 2017).

La prueba innominada, por tanto, es aquella que no está prevista en la legislación, admitida en el proceso con carácter excepcional, debiendo tenerse mucho cuidado al respecto. Esto se debe a que, según Lopes (2020), a la hora de admitir todo tipo de pruebas no expresamente prohibidas, se deben tener en cuenta las prohibiciones derivadas del sistema de garantía. Por tanto, se interpreta que las pruebas anónimas deben respetar los límites de la Constitución Federal. Finalmente, el autor cita, como ejemplo, una prueba anónima que viola varias garantías, siendo el polígrafo, más conocido como detector de mentiras, científicamente inaceptable.

La finalidad de la prueba constituye también un elemento clasificatorio, relacionado con el destino de la prueba y su cumplimiento de las disposiciones legales. Son anómalas las pruebas cuyos medios, previstos por la ley, han desviado su finalidad, es decir, han sido sustituidos por otro medio que no es el más jurídicamente adecuado al fin perseguido. Renato Brasileiro de Lima cita el ejemplo de una llamada telefónica a un testigo que reside en otro distrito, en lugar de una prueba testimonial a través de una carta precatoria. Si bien el acta del notificador que narra la situación puede servir como prueba, no tiene el mismo valor que la prueba testimonial, resultando en nulidad absoluta (Lima, 2019).

Además de anómalas, las pruebas pueden ser irregulares, lo que se produce en violación del procedimiento determinado por la ley. Sirve de ejemplo la redacción del testimonio de un testigo, en sustitución de la grabación, violando la regla de la oralidad. Si la prueba alcanza el fin deseado, sin vulnerar derechos fundamentales, no resultará en nulidad, es decir, la prueba irregular genera sólo nulidad relativa (Dezem, 2008).

La última clasificación se refiere a la imposición legal de la forma de prueba. Se divide en prueba jurídica positiva y prueba jurídica negativa. Se dice positiva cuando la legislación determina los medios de prueba de un hecho determinado, como el estado civil del sujeto, demostrado mediante un documento, lo cual no puede hacerse mediante fotografías u otros. Se entiende por pruebas negativas aquellas que no tienen un método especificado en la legislación, y pueden realizarse de varias formas distintas, en cuyo caso se diferencian de las pruebas positivas, que a su vez, tienen un guion determinado y determinado. Si no se respeta la forma de producción de la prueba positiva, se puede dar lugar a su anulación (Távora & Alencar, 2017).

Sin embargo, existe otra opinión sobre esta clasificación. Renato Brasileiro de Lima considera positiva la prueba que pretende señalar la existencia del hecho, es decir, confirmarlo. Prueba negativa sería la que pretende negar que se haya producido el delito. Sin embargo, es importante señalar la confusión entre evidencia negativa y evidencia contraria, ya que tienen roles diferentes. La clasificación señalada por el autor, sin embargo, no es la más aceptada por la doctrina y legislación correspondiente (Lima, 2019).

La clasificación de las pruebas en pruebas reales y personales vuelve a estar en el orden del día. Esto se debe a que sus opiniones también definen lo que se llama fuente de evidencia, concepto esencial para entender el asunto. Fuente de evidencia es el término utilizado para nombrar las cosas o personas de las cuales es posible obtener pruebas, dando lugar a la clasificación entre personales y reales (Lameirão & Almeida, 2015).

Todo aquello que pueda servir para esclarecer un hecho se caracteriza como fuente de prueba y deriva del hecho delictivo, cualquiera que sea la iniciación del proceso. Esto quiere decir que son anteriores a los registros mismos, es decir, su introducción al evento se da a través de los medios de prueba (Lima, 2019).

En conclusión, las diversas clasificaciones de la prueba en el proceso penal demuestran la complejidad y necesidad de precisión en la búsqueda de la verdad. Entender la prueba como directa o indirecta, personal o real, y la distinción entre prueba nombrada y no nombrada, por ejemplo, son fundamentales para la correcta aplicación de la ley. Además, la categorización de la prueba en términos de valor, efecto, renovación y cumplimiento de la legislación refuerza la importancia del cumplimiento estricto de los principios legales y las garantías constitucionales. Así, cada categoría de prueba juega un papel esencial en la búsqueda de justicia, asegurando la imparcialidad y la justificación adecuada de las decisiones judiciales.

IV. MEDIOS DE PRUEBA Y OBTENCIÓN DE PRUEBAS

Los medios de prueba, a su vez, son los instrumentos que introducen la prueba en el expediente, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal. Son pasos que se dan en el curso de la acción, es decir, son endoprocesales, tal como lo describen Távora y Alencar (2017). A modo de ejemplo, se menciona que para acreditar una lesión corporal se puede utilizar un testigo, peritaje o fotografía, pero solo será considerada como prueba luego de una descripción en el expediente.

Sin embargo, Badaró (2016) advierte de la distinción entre medios de prueba y medios de producción de prueba, y ambos conceptos no pueden confundirse. Se explica que los medios de prueba pueden servir, directamente, para convencer al juez, mientras que los medios de obtención de pruebas, también conocidos como medios de

investigación, son los mecanismos de recolección de elementos. Estos elementos sí tienen poder para influir en la decisión del juez.

Lima (2019) afirma que los medios de obtención de pruebas son los realizados durante la fase inquisitorial, es decir, la fase preliminar de la investigación, sin olvidar, sin embargo, analizar las producidas durante la acción penal, cuando se descubren fuentes de prueba distintas de las utilizadas previamente para formar la opinión del delito. Es decir, se dice que son extraprocesales, cuya ejecución se da a través de agentes policiales, encargados de investigar el delito. Es de destacar que si tales actos se realizan en violación de disposiciones legales, los medios de prueba estarán imbuidos de ilegalidad, requiriendo el consecuente desmantelamiento del proceso.

Es importante analizar la cuestión de la valoración de las pruebas producidas durante la instrucción. Se entiende como un juicio valorativo ejercido por el juez, mediante la acción de otorgar a la prueba su debida importancia, coincidiendo con el resultado procesal, siguiendo los criterios establecidos en reglas generales (Avena, 2018).

En cuanto al acto de valoración de la prueba, el Código Procesal Penal brasileño, en su artículo 155, optó por el sistema de persuasión racional del juez, también conocido como condena libre motivada. En este régimen, el juez tiene la libertad de decidir, según sus convicciones personales, sin que una prueba tenga más valor que otra, es decir, no existe una escala predeterminada de valoración de la prueba que debe seguir. Sin embargo, la decisión, aunque sea libre, debe basarse no en el conocimiento privado, sino en las pruebas recabadas durante la investigación, y no puede, en caso de condena, basarse exclusivamente en pruebas obtenidas en la fase inquisitorial, si ésta no se repite ante el tribunal. Buscando siempre la verdad real (Rangel, 2017).

Por tanto, se entiende que no existe jerarquía entre las pruebas. No existe supremacía de una prueba sobre otra para respaldar un delito determinado. Esto significa que, por ejemplo, la prueba documental o pericial no tiene mayor valor que la prueba testimonial, en teoría. Se pueden utilizar todos los medios para demostrar lo que proponen. Sin embargo, existen dos situaciones diferentes, a saber, la prueba relacionada con el estado de las personas - ya que la prueba testimonial no es

suficiente para probar por ejemplo el matrimonio - y un examen del *corpus delicti*, cuando la infracción deja huella - ya que no es admisible que la prueba de falsedad material, por ejemplo, se pruebe sólo por medios testimoniales, con las condiciones para la realización de un peritaje, un examen hábil para la demostración técnica del hecho (Pacelli, 2013).

En resumen, el objeto de la prueba penal juega un papel crucial en la búsqueda de la verdad real y en la garantía de una decisión justa en el proceso penal brasileño. Las diversas clasificaciones de las pruebas, así como sus medios para obtenerlas y evaluarlas, revelan la complejidad e importancia de este tema dentro del ordenamiento jurídico. La distinción entre objeto de prueba y objeto de prueba, la diferenciación entre prueba directa e indirecta, y las clasificaciones según materia, valor, forma, entre otras, demuestran que la prueba en el proceso penal no es sólo un elemento técnico, sino una herramienta esencial para la justicia. La estricta observancia de las reglas de obtención y producción de prueba, combinada con la convicción libre y motivada del juez, permite analizar cada prueba en el contexto de la búsqueda de la verdad real, respetando las garantías constitucionales. Finalmente, es fundamental que la actuación de los operadores jurídicos se base en un conocimiento amplio y profundo de las clasificaciones y principios probatorios, asegurando que el proceso penal se lleve a cabo de manera justa y eficaz.

V. CONCLUSIÓN

Este artículo abordó la cuestión de la prueba en el proceso penal brasileño, destacando su relevancia fundamental en el proceso de búsqueda de la verdad real y en la formación de decisiones justas. El análisis inicial de la teoría general de la prueba destacó su importancia en el ordenamiento jurídico, siendo un medio esencial para reconstruir los hechos y lograr la justicia. La prueba, en sus diversos aspectos y clasificaciones, fue examinada desde diferentes perspectivas, como la prueba directa e indirecta, personal y real, y también el complejo papel del juez en la evaluación de la prueba con base en el principio de convicción libre motivada.

El estudio de la prueba en especie y las clasificaciones presentadas, como prueba completa y semicompleta, renovable o irrepitable, así como prueba innominada

e irregular, permitieron comprender el papel esencial de la prueba en la estructuración del proceso penal. La relación entre la prueba y la búsqueda de la verdad, así como las consecuencias de un proceso sin el debido sustento probatorio, refuerzan la necesidad de una acción judicial basada en elementos sólidos e imparciales, respetando los derechos de las partes y la garantía de un juicio justo.

En resumen, la prueba es un pilar estructurante del proceso penal y su función principal es asegurar que las decisiones del juez se basen en elementos concretos y confiables. La búsqueda de la verdad, aunque subjetiva y limitada, es uno de los pilares del proceso penal, y su reconstrucción, a través de pruebas producidas de manera legal y legítima, es esencial para garantizar la justicia en el sistema jurídico brasileño. El artículo reafirma la importancia de observar los estándares procesales, evitar distorsiones que puedan comprometer la imparcialidad del juicio y asegurar que el proceso penal se lleve a cabo de manera que proporcione decisiones justas y fundadas.

V. REFERENCIAS

- Avena, N. (2018). *Processo penal* [10a. ed., rev. e atual]. Método. E-book.
- Badaró, G. H. (2016). *Processo penal* [4a. ed.]. Revista dos Tribunais.
- Barros, M. A. (2002). *A busca da verdade no processo penal*. Revista dos Tribunais.
- Capez, F. (2017). *Curso de processo penal* [24a. ed.]. Saraiva.
- Coutinho, J. N. de M. (2002). *Glosas a verdade, dúvida e certeza, de Francesco Carnelutti, para os operadores do direito*. In Anuário Ibero-americano de direitos humanos (p. 177). Lumen Juris.
- Dezem, G. M. (2008). *Da prova penal: Tipo processual, provas típicas e atípicas* (atualizado de acordo com as leis 11.689/08, 11.690/08 e 11.719/08). Milenium.
- Lameirão, C. M. R., & Almeida, F. L. L. de. (2015). *Sinopse de direito processual penal* [4. ed.]. Edijur.
- Lima, R. B. de. (2019). *Manual de processo penal*. [7a. ed.]. Jus Posidvm. E-book.
- Lopes, A. Jr. (2003). *Sistemas de investigação preliminar no processo penal*. [2a. ed.]. Lumen Júris.
- Lopes, A. Jr. (2020). *Direito processual penal*. [17a. ed.]. Saraiva.

- Malatesta, N. F. D. (2013). *A lógica das provas em matéria criminal* [S.l.]. Sarvanda.
- Nicollitt, A. L. (2011). *Lei nº 12.403/2011: O novo processo penal cautelar, a prisão e as demais medidas cautelares*. Elsevier.
- Nucci, G. S. (2025). *Curso de direito processual penal*. [22a. ed.]. Forense
- Pacelli, E. (2013). *Curso de processo penal*. [17a. ed.]. Atlas.
- Rangel, P. (2017). *Direito processual penal*. [25a. ed.]. Atlas.
- Silva, L. C., & Silva, F. R. A. (2013). *Manual de processo e prática penal*. [6a. ed.]. Forense.
- Távora, N., & Alencar, R. R. (2017). *Curso de direito processual penal* (12. ed.). Salvador: Jus Podivm. E-book.
- Voltaire. (2017). *Tratado sobre a tolerância*. A. L. R. Bedê, Trad. Martin Claret.